Imprimir

El atentado con un carro bomba cargado con 100 kilos de explosivos ocurrido la noche de este lunes 23 de noviembre en la plaza principal de la ciudad de Villavicencio constituye un hecho que debe ser condenado sin ambigüedades pues a todas luces se trata de un atentado terrorista que dejó como saldo 24 personas heridas dentro de las cuales una niña de nueve años, la destrucción de una parte significativa de la Gobernación del Meta, así como la afectación a otras ochenta edificaciones. Hasta ahora las autoridades atribuyen este atentado al Frente 39 del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, que es la Disidencia que dirige Calarcá Córdoba que hasta ahora no se ha reivindicado esta acción criminal.
En la mañana de ese mismo lunes 23 de noviembre la ciudad de Cúcuta se vio sacudida por el impacto de drones cargados con explosivos que cayeron sobre las instalaciones del Departamento de Policía en una zona residencial de la ciudad dejando tres civiles heridos y afectando viviendas y hoteles aledaños. Esta acción las autoridades la atribuyeron a un comando del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el cercano departamento del Cesar ha sufrido durante lo que va del gobierno del Showman Abelardo 13 atentados.

El recrudecimiento de las acciones de todos los actores armados ilegales es evidente y es la respuesta a la política de guerra declarada por el gobierno de Abelardo de la Espriella a todos los actores armados a quienes solo les ofrece con el dócil y servil concurso de su coalición de gobierno integrado en el Congreso por los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical, de la U y los grupos cristianos, la rendición incondicional o la muerte. Todos los espacios de dialogo o de acercamientos fueron abrupta e irresponsablemente clausurados por el gobierno, pero con unas falencias muy grandes pues carece de una estrategia de seguridad, de una estrategia de contención y de confrontación armada al tiempo que carece de las más modernas tecnologías para confrontar el uso de los drones cargados con explosivos que ahora son usados por los actores armados ilegales sean estos de naturaleza política o grupos armados organizados ligados con las economías ilegales de la coca y la minería ilegal. O los propios grupos sucesores del paramilitarismo que fueron muy cercanos al propio De la Espriella.

Ahora bien, el Showman Abelardo ha interpretado esta contraofensiva de los actores armados ilegales como una respuesta desesperada a los bombardeos y acciones de la fuerza pública en la que los resultados por cierto han sido magros. Estos atentados más bien lo que han mostrado es la fragilidad del gobierno y de las fuerzas armadas para asestar golpes certeros a estos actores armados ilegales. Por el contrario, la percepción no solo de sectores amplios de la población sino de los expertos es que el gobierno carece de un plan de acción y que la política espectáculo del Showman Abelardo carece de una estrategia definida, unos objetivos claros, unas herramientas tecnológicas necesarias que no aparecen por ninguna parte, y una estrategia de protección de la población que tampoco se ve por ninguna parte.

Los costos en vidas y el deterioro de la seguridad ciudadana

En su último informe sobre los costos de la declaratoria de guerra total por parte del Showman Abelardo en sus primeros cien días de gobierno, INDEPAZ ha señalado que fueron asesinados 43 integrantes de la Fuerza Pública y otros 219 resultaron heridos. Estos datos nos dicen que diariamente más de dos uniformados son afectados. También es claro como lo anota el analista y experto Carlos Medina Gallego es muy preocupante la situación en el Ejército Nacional, según las cifras recogidas en el balance anterior los asesinatos de militares aumentaron un 163% y las lesiones un 264% frente a los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro en 2022.

“Aunque estos datos no permiten atribuir automáticamente el incremento de las víctimas a la política gubernamental, si constituyen indicadores que obligan a examinar la relación entre la intensificación de las operaciones militares, las respuestas de las organizaciones ilegales y las condiciones de seguridad en las que desarrollan sus funciones los integrantes de la Fuerza Pública…el Ministerio de Defensa habría registrado 339 casos clasificados como terrorismo con corte al 5 de noviembre de 2026. Aunque esta categoría no corresponde exclusivamente a acciones insurgentes, constituye un indicador relevante para comprender las dimensiones de la Violencia”, (Medina Gallego, Carlos. Colombia: la confrontación armada frente a la política de “Guerra Total” del gobierno de Abelardo de la Espriella, noviembre 24 de 2026).

También acierta a mi juicio Carlos Medina cuando señala el incremento de los costos en vidas, dolor y afectación de la población civil que al fin y al cabo como lo demostró el Informe Final de la Comisión de la Verdad que son los civiles quienes pagan el mayor costo de esta infame guerra en muertes, en desaparecidos, en desplazados. El informe de Indepaz reseñado indica que durante los primeros cien días de este gobierno se registró el asesinato de 45 líderes sociales, dentro de ellos nueve mujeres lideresas y además otros 8 firmantes del Acuerdo de Paz. En este mismo período se han registrado 26 masacres con un saldo de 87 asesinatos entre ellas cinco menores de edad.

Así mismo durante agosto y septiembre de 2026 se registraron 6.667 personas desplazadas y fue nuevamente el departamento del Cauca en que presentó el mayor número de personas desplazadas con 3.474, seguido de Chocó con 1.609, Antioquia con 739 y Bolívar con 424. El 63.7% de las personas desplazadas durante este período habrían sido desplazadas por el enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales.

Lo que resulta evidente de todas estas cifras es por una parte el recrudecimiento de las acciones armadas tanto entre actores ilegales como de estos con las fuerzas armadas gubernamentales, lo que como se ve, se traduce a su vez en una crisis humanitaria que golpea a las comunidades que viven en los territorios que son escenarios de esa confrontación principalmente Norte de Santander, Meta, Cauca, Sur de Bolivar, Arauca, Casanare, Antioquia, Cesar, Chocó y Nariño.

También es evidente que la política de seguridad democrática 2.0 hace aguas por todo el país. El Showman Abelardo declara una guerra total contra todos los actores armados ilegales que no ha sido planificada, que no tiene objetivos territoriales claros y definidos. Con shows mediáticos no se suple ni las carencias tecnológicas ni la falta de una verdadera inteligencia ni la alianza con la sociedad civil de esos territorios que requiere una presencia del Estado no solo militar sino en obras de infraestructura, en escuelas, puestos de salud, inversión social, sustitución de cultivos de uso ilícito, es decir, se requiere una política de seguridad integral y no simplemente palabreria y actitudes desafiantes que son respondidas con atentados como el de Villavicencio. Es urgente y necesario exigir un replanteamiento de

fondo de esa política que solo traerá muerte, desolación y pobreza.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Foto tomada de: Kienyke